

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

EXPEDIENTE No. 2018-00197-00

Bogotá D. C, ocho (08) de Febrero de dos mil diecinueve (2019)

Procede el Despacho al estudio de la **CONCILIACION EXTRAJUDICIAL** celebrada entre el señor **ÁLVARO PAYAN** y la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA** ante la **PROCURADURIA 86 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

ANTECEDENTES

I. SOLICITUD DE CONCILIACIÓN (fls. 90 a 93).

Objeto de la conciliación:

1. Que se declare la nulidad del acto administrativo No. OFI16-90163 MDNSGDAGPSAP del 10 de noviembre de 2016, por medio del cual el Ministerio de Defensa Nacional, respondió de manera negativa la solicitud elevada por el actor.

A título de restablecimiento de derecho

2. Ordenar a la entidad accionada la reliquidación y reajuste de la pensión de invalidez reconocida al accionante mediante la Resolución No. 3558 del 16 de noviembre de 1956.

3. Que el Ministerio de Defensa Nacional, cancele los porcentajes correspondientes a la diferencia existente entre el incremento en que fue aumentada la pensión de invalidez, en aplicación de la escala gradual salarial porcentual y el índice de precios al consumidor conforme a lo señalado en el artículo 14 de la ley 100 de 1993, norma que dispone el incremento anual de las pensiones, en un

porcentaje igual al IPC del año anterior, a partir del 1997 hasta el año 2017, en las anualidad en las cuales existía la diferencia.

4. Reajustar la pensión del accionante, año por año, a partir de 1997 a la fecha, con los nuevos valores que arroje la reliquidación de la pensión.

5. Ordenar el pago efectivo e indexado de los dineros correspondientes a la diferencia que resulte entre la liquidación solicitada y las sumas canceladas por concepto de asignación de retiro desde el año 1997 en adelante hasta la fecha en que sea reconocido el derecho precitado.

6. Ordenar el pago de los intereses moratorios sobre los dineros provenientes del reajuste conforme al IPC, a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia.

7. Ordenar a la entidad accionada el pago de gastos y costas procesales, así como las agencias en derecho.

La causa fáctica y legal se sintetiza así:

1. Al señor Soldado ® Álvaro Payan, mediante Resolución No. 3558 del 16 de noviembre de 1956, le fue reconocida pensión mensual por invalidez, a partir del 16 de febrero de 1956 (Fl. 21- 22Vto)

2. La asignación de retiro del convocante en los años 1997, 1999, 2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, fue reajustada en un porcentaje inferior al Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior, desconociendo lo preceptuado en el artículo 1 de la ley 238 de 1995, el artículo 14 y el parágrafo 4º del artículo 279 de la ley 100 de 1993.

3. El día 27 de Octubre de 2016 el actor solicitó ante el Ministerio de Defensa Nacional el reajuste de la pensión de invalidez (Fl. 8, 10); La entidad convocada mediante oficio No. OFI16-90163 MDNSGDAGPSAP del 10 de noviembre de 2016 (Fl. 11 Vto), indica que para efectuar el reajuste solicitado se debe emplear el mecanismo de conciliación.

II. LA CONCILIACIÓN (fls. 100 a 101 Vto).

El acto conciliatorio prejudicial registrado en el Acta REG-IN-CE-002 con radicación No. 019-2018 SIAF 1432 del Veintidós (22) de Enero de dos mil Dieciocho (2018); y audiencia realizada el Once (11) de Mayo de dos mil Dieciocho (2018), quedó consignada en los siguientes términos:

(...)

“En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de la PARTE CONVOCANTE para que manifieste sus pretensiones: a lo cual contestó me permito al Despacho indicarle que me reafirmo en todos y cada uno de los hechos y las pretensiones plasmadas en la conciliación que nos congrega, las cuales se refieren a lo siguiente: 1) Declarar la nulidad del acto administrativo No. OFI16-90163MDNSGDAGPSAP del 10 de noviembre de 2016, mediante el cual, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, respondió en forma negativa la solicitud contenida en el derecho de petición. 2) Como consecuencia a lo anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, ordenar la reliquidación y reajuste de la pensión de invalidez reconocida por el MINISTERIO DE DEFENSA, mediante la Resolución 3558 de 16 de noviembre de 1956. 3) que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, al soldado ® ALVARO PAYAN, adicionándole los porcentajes correspondientes a la diferencia existente entre el incremento que fue aumentada la pensión de invalidez, en aplicación de la escala gradual salarial porcentual y el índice de precios al consumidor IPC que se aplicó para los reajustes pensionales con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, norma que dispone el incremento anual de las pensiones,, en un porcentaje igual al IPC del año anterior en los años a partir de 1997 hasta el año 2017, en las anualidades en las cuales exista la diferencia. 4) Reajustar la pensión de mi mandante, año por año, a partir de 1997 a la fecha, con los nuevos valores que arroje la reliquidación solicitada en el literal anterior. 5) Ordenar el pago efectivo e indexado de los dineros correspondientes a la diferencia que resulte entre la liquidación solicitada y las sumas canceladas por concepto de asignación de retiro desde el año 1997 en adelante hasta la fecha en que sea reconocido el derecho precitado. 6) Ordenar el pago de los intereses moratorios sobre los dineros provenientes del reconocimiento de la aplicación de los porcentajes precitados en los numerales anteriores a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia. (sentencia C- 188/99, expediente 2191 del 24 de marzo de 1999). 7) ordenar a la entidad demandada el pago de gastos y costas procesales, así como las agencias en derecho”.

“Acto seguido se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocada MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , con el fin que se sirva indicar que decidió el comité de conciliación respecto a la solicitud que hoy nos convoca: Con fundamento en la información suministrada por el apoderado en la propuesta presentada, se convoca a Conciliación Prejudicial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, con el objeto de lograr un acuerdo conciliatorio con el señor ALVARO PAYAN en calidad de pensionado por invalidez, a quien le fue reconocida la prestación mediante Resolución No. 3558 de 1956 del 16 de noviembre de 1956 y a título de restablecimiento del derecho se reconozca y reajuste la diferencia salarial

de conformidad para el IPC. El comité de conciliación por unanimidad reconsidera la decisión tomada en sesión de fecha 26 de abril de 2018 y autoriza conciliar, en forma integral, con base en la formula desarrollada por la mesa de trabajo del gobierno nacional en materia de reconocimiento por vía de conciliación del IPC, para lo cual se presenta propuesta en los siguientes términos: 1- Se reajustará la pensión a partir de la fecha de su reconocimiento, aplicando el porcentaje más favorable entre el IPC y el principio de oscilación únicamente en el periodo comprendido entre 1997 y 2004. 2- El reconocimiento por concepto de capital obedece al 100% del valor diferencial entre la pensión debidamente reajustada y el valor pagado, desde la fecha certificada por prestaciones sociales, hasta cuando efectivamente se realice el reajuste en la nómina. 3- La indexación será objeto de reconocimiento en un porcentaje del 75%. 4- Sobre los valores reconocidos se aplicarán los descuentos de Ley. 5- Se aplicará la prescripción cuatrienal sobre las mesadas pensionales y los aportes, en las condiciones establecidas en la normatividad especial aplicable a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 6- Se actualizará la base de liquidación a partir del mes de Enero del año 2005, con ocasión del reajuste obtenido hasta el año 2004.”

“Acto seguido se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte convocante a quien se le corrió traslado de la decisión tomada por el comité de conciliación de la convocatoria quien manifiesta: Le manifiesto al Despacho que acepto la fórmula de conciliación propuesta por la parte convocada en el escrito y liquidación anexa a esta diligencia, en los términos y cuantías vistos en el documento”.

(...)

CONSIDERACIONES

Para decidir acerca de la Conciliación Prejudicial contenida en el Acta REG-IN-CE-002 con radicación No. 019-2018 SIAF 1432 del Veintidós (22) de Enero de dos mil Dieciocho (2018); y audiencia realizada el Once (11) de Mayo de dos mil Dieciocho (2018), el Despacho seguirá las orientaciones dadas en materia de conciliación por el Decreto 1818 de 1998¹ en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 23 de 1991 y 446 de 1998, ley 1285 de 2009 y 1395 de 2010, que exigen la revisión de los siguientes aspectos: la procedibilidad y la legalidad.

¹ “Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.”

I. PROCEDIBILIDAD.

Son conciliables las controversias susceptibles de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho², siempre y cuando reúnan los requisitos de forma y de fondo exigidos por las normas que regulan la materia, conforme lo predica el numeral 6 del artículo 46 del decreto 1818 de 1998, lo que indica que además de acreditar los presupuestos, deben estar presentes todos los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, y demás normas procesales para el reconocimiento del derecho reclamado³.

1. El carácter particular y patrimonial del asunto. El presente caso se cumple este presupuesto porque se trata de una controversia integrada por dos extremos el señor **ÁLVARO PAYAN** y la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**; quiénes solucionaron las diferencias sobre la reliquidación y pago de la asignación de retiro con base en el incremento del IPC, entre 1997 y 2004.

2. El agotamiento de la actuación administrativa.

El señor Álvaro Payan, radicó petición ante el Ministerio de Defensa Nacional el día Veintisiete (27) de Octubre de Dos Mil Dieciséis (2016) visible a folio 8 a 10, en la que solicitó reliquidar y reajustar la asignación de retiro con base en aumento del Índice de Precios al Consumidor para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, y 2011, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 100 de 1993 y la ley 238 de 1995.

Mediante oficio No OFI16-90163 MDNSGDAGPSAP del 10 de noviembre de 2016 (fl. 11 a 11 Vto), la entidad informo que con base en las nuevas líneas jurisprudenciales sobre la materia, para facilitar el pago de los reajustes conforme al IPC, se adelantara la conciliación dentro de los procesos y extrajudicialmente.

² Lo dice el Art. 59 de Ley 23 de 1991 modificado por el Art. 70 de la Ley 446 de 1998, repetido en Art. 56 del Decreto 1818 de 1998,

³ Según el Art. 61 de la Ley 23 de 1991 modificado por el Art. 81 de la Ley 446 de 1998 y reiterado en el Art. 63 del Decreto 1818 de 1998.

3. Caducidad de la acción.

Por recaer la conciliación sobre la reliquidación de una prestación periódica, no se encuentra sujeta a caducidad, en los términos del artículo 164 literal c) del C.P.A.CA, permitiendo que la demanda sea presentada en cualquier tiempo.

4. Las pruebas⁴. El acuerdo tiene como soporte los siguientes documentos:

- Petición radicada por el convocante, ante el Ministerio de Defensa Nacional, con Radicado No. 00074947 del 27 de octubre de 2016 (fls. 8 a 10; 32 a 34; 51 a 53)

- Copia del oficio No OFI16-90163 del 10 de noviembre de 2016, la entidad accionada sugiere al convocante radicar solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Delegada ante lo Contencioso Administrativo (fls. 11 a 11 Vto; 35 a 35 Vto; 55 a 56)

- Resolución No.3558 del 16 de noviembre de 1956, mediante el cual el Ministerio de Guerra “reconoce una pensión mensual de invalidez y una compensación por la misma causa al Soldado ALVARO PAYAN”, a partir del 16 de febrero de 1956 (fls. 13 a 14; 36 a 37; 57 a 59)

- Copia de la Hoja de Servicios No. 5021 correspondiente al señor Soldado ® Álvaro Payan (fl. 17 a 17 Vto; 39 a 39 Vto; 61 a 62)

- Copia de radicado de la solicitud de Conciliación prejudicial ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fl. 72) y ante la Dirección del Ministerio de Defensa Nacional (fol. 71)

- Auto No. 1432 del 2 de febrero de 2018, mediante el cual la Procuradora 86 Judicial I para asuntos Administrativos, admite la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por el convocante y fija fecha para celebrar audiencia de conciliación (fl. 73)

⁴ De acuerdo al Art. 60 de la Ley 23 de 1991 modificado por el Art. 80 de la Ley 446 de 1998.

- Certificación expedida por la Secretaria del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional, en sesión del 26 de abril de 2018, en la cual se decide CONCILIAR frente a las pretensiones del convocante (fls. 95 a 96)

- Liquidación efectuada por la Dirección Administrativa – Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, del año 1997 a diciembre de 2017 (fls. 98 a 99 Vto)

II. LEGALIDAD.

Con el fin de determinar si es conforme a la Constitución y la ley, la CONCILIACIÓN PREJUDICIAL celebrada por las partes en el Acta REG-IN-CE-002 con radicación No. 019-2018 SIAF 1432 del Veintidós (22) de enero de dos mil Dieciocho (2018); y audiencia realizada el Once (11) de mayo de dos mil Dieciocho (2018), se procederá a estudiar el fondo del asunto pactado.

1. SITUACIÓN JURIDICA GENERAL

En la Constitución de 1991, a través de los Arts. 217 y 218, se determinó que el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública fuera de carácter especial, entre otras razones por la naturaleza del servicio prestado al Estado, y según el Art. 150 numeral 19, literal e), del Estatuto Superior, en forma concurrente corresponde al Legislador y al Ejecutivo Nacional fijar dicho régimen, así: el Congreso señala los objetivos y criterios generales y el Gobierno Nacional los desarrolla por medio de los actos administrativos.

Atendiendo a tales postulados, el Congreso profirió la Ley 4ª de 1992, destacándose el siguiente enunciado:

"ARTICULO 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2o.

PARAGRAFO. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996."

Por su parte, el Gobierno Nacional en cumplimiento de esta directriz, a partir del 1º de enero del año 1996, señaló la escala gradual porcentual que debía regir cada año, a través de los Decretos 107/96, 122/97, 58/98, 62/99, 2724/00, 2734/01, 745/02, 3552/03 y 4158/04.

Dicha escala se entiende que acoge el principio de oscilación reglamentado por los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990, del cual tratan específicamente los artículos 169, 151 y 110 de tales decretos respectivamente, y cuya redacción se realizó en idénticos términos con algunas salvedades, así:

OSCILACION DE ASIGNACIONES DE RETIRO Y PENSIONES. *Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente Decreto, se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad (...). En ningún caso aquéllas serán inferiores al salario mínimo legal. Los Oficiales y Suboficiales (Agentes) o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración Pública, a menos que así lo disponga expresamente la Ley.*

PARAGRAFO. *Para la oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones de Oficiales Generales y Coroneles, se tendrá en cuenta como sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las disposiciones legales vigentes que regulen esta materia, más las partidas señaladas en el art. (...).* (Nota: este parágrafo no se haya en el Decreto 1213 y la parte entre paréntesis son los términos diferentes excluidos).

Bajo la órbita del principio mencionado se ha entendido que los incrementos introducidos en los factores salariales del personal activo repercuten en las prestaciones periódicas de los miembros retirados, es decir, el reajuste opera automáticamente cuando se altera la remuneración de los oficiales, suboficiales y agentes al servicio del Estado.

Sin embargo, por medio de la Ley 238 de 1995 se adicionó el Art. 279 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de conceder los beneficios establecidos en los artículos 14 y 142 del sistema general de seguridad social integral a la Fuerza Pública.

Inicialmente, la Ley 100 de 1.993 había dictaminado que:

Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía

Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de la Fuerza Pública.

(...)

Posteriormente, la Ley 238 de 1995, expresó:

"ARTÍCULO 1o. Adiciónese al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente párrafo:

"Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados".

ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias."

El Art. 14 citado en la norma transcrita dice:

"Artículo 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1 de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno."

Dentro del contexto anterior, de las normas enunciadas en precedencia, aparentemente surge un conflicto entre el reajuste que obra por el principio de oscilación y el que procede conforme al IPC, pero tal parecer no tiene asidero, pues examinada la materia se deduce que ambos mecanismos funcionan en forma armónica y complementaria; vale anotar, la aplicación no es excluyente o contradictoria sino preferencial o sustitutiva dependiendo del punto de vista del observador.

Veamos, a la entidad le corresponde efectuar el reajuste de la prestación que sea más favorable para el servidor público, conforme a la normatividad vigente, así, el administrador en primer lugar aplicará en la liquidación las normas de carácter especial que para cada anualidad expide el Gobierno Nacional y que desarrollan el principio de oscilación, y luego, realiza la misma liquidación con base en el indicador del DANE, al comparar los resultados arrojados por cada vía mencionada, se aplicará el reajuste que resulte mayor, que sustituye al que resulte menor, vale

reiterar, se escoge la más favorable para el servidor público en términos de la cuantía del reajuste.

De esta forma, se recogen las directrices de la Corte Constitucional consignadas en la Sentencia C - 941 de 2003 que declaró exequible el principio de oscilación como sistema de reajuste de la asignación de retiro, haciendo la salvedad que en cuanto a la posición de la Corte Constitucional asumida en esa providencia en el sentido de que la asignación de retiro no era comparable a las pensiones, fue corregida posteriormente, mediante Sentencia C - 432 de 2004 cuando indicó que la naturaleza de esa prestación era pensional, entonces, bajo tal entendido es admisible también, aplicar el mandato de la Ley 238 de 1995, en forma alternativa al principio de oscilación en los términos ya consignados en precedencia.

El anterior procedimiento que compagina y armoniza métodos y directrices para reajustar la prestación objeto de estudio, es más ajustado a los principios Constitucionales, como el contenido en la sentencia C - 862 de 2006, en la cual la Corte determinó que, en el Art. 53 del Estatuto Superior, se encuentra consagrado el **derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo**, en cabeza de los pensionados y a cargo del Estado, motivo por el cual rechazar la aplicación de los reajustes por el sistema inflacionario, contraria derechos de rango constitucional y no solamente de orden legal.

Se concluye, que aceptar la inclusión dentro del régimen prestacional de la Fuerza Pública del sistema de reajuste con fundamento en la inflación, es más consonante con la equidad, la justicia y la igualdad⁵, toda vez que es un hecho notorio para el más humilde ciudadano que la inestabilidad de nuestra economía y su matiz inflacionario influye negativamente sobre la capacidad de compra de los

⁵ "En reiteradas oportunidades esta Corporación se ha manifestado en relación con el establecimiento de los regímenes excepcionales, ha considerado que ellos se ajustan al ordenamiento constitucional, en cuanto suponen la existencia de unas condiciones o prestaciones más favorables para los trabajadores a quienes comprende y cuya finalidad es la preservación de los derechos adquiridos. Pero, cuando consagren para sus destinatarios un tratamiento inequitativo frente al que se otorga a la generalidad de los trabajadores cobijados por el régimen previsto en la ley 100 de 1993, estas regulaciones deberán ser descalificadas en cuanto quebrantan el principio constitucional de la igualdad." Sentencia C- 1050 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonel

elementos básicos para la subsistencia, y por lo tanto, tal sistema es el medio más idóneo para corregir el impacto de la inflación sobre las asignaciones de retiro, cuando los incrementos porcentuales determinados por el DANE, sean más beneficiosos para efectos del reajuste anual de la prestación.

A lo anterior debe sumarse que la Ley 923 de 2004⁶ indicó que para fijar el régimen de las asignaciones de retiro de la Fuerza Pública, se debe tener en cuenta como criterio y objetivo el mantenimiento del poder adquisitivo –Art. 2-, y que los reajustes de las asignaciones de retiro deben tener en cuenta, como **mínimo**, *el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo* –Art. 3, 3.13-, vale anotar, el sistema de oscilación opera como una base mínima para que el administrador de la prestación realice el reajuste anual, el cual no sustituye, ni deroga los incrementos por inflación determinados en la Ley 238 de 1998, pues dicho mecanismo impera cuando produce un resultado mayor al obtenido por los porcentajes derivados del principio de oscilación, en razón del principio de favorabilidad y la conexidad con derechos fundamentales, en consecuencia, bajo este marco se debe aplicar lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004.

Así mismo, la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional, refuerza la aplicación directa e inmediata de los Arts. 48 y 53 de la Carta Magna para ordenar el reajuste mediante el mecanismo del IPC para cualquier pensión reconocida en cualquier tiempo –antes o posterior a la Ley 100- y de cualquier naturaleza –régimen general o especial.

2. SITUACIÓN PARTICULAR

El Ministerio de Guerra, por medio de la Resolución No. 3558 del 16 de noviembre de 1956, reconoció una pensión mensual vitalicia de invalidez al Soldado ® Álvaro Payan, a partir del 16 de febrero de 1956 (fls. 13 a 14; 36 a 37; 57 a 59).

l

⁶ *Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política*

Con petición radicada por el señor Álvaro Payan, el 27 de octubre de 2016 ante el Ministerio de Defensa Nacional, con Radicado No. 00074947 (fls. 8 a 10; 32 a 34; 51 a 53), solicitó el reajuste de la asignación de retiro con el incremento con base en el IPC, cuando este fuera mayor que los porcentajes de variación establecidos anualmente por el Gobierno, para las asignaciones básicas de los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 de conformidad con lo dispuesto en la ley 238 de 1995, en tanto que la conciliación prejudicial se refirió a los años 1997 en adelante (fls. 90 a 93), encontrándose agotada en debida forma la actuación administrativa frente a los años 1997, 1999 y de 2001 a 2011, por lo que se realizará revisión de legalidad frente a estos años.

Frente a este aspecto basta señalar que la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial que por reparto correspondió a la Procuraduría 86 Judicial I para Asuntos Administrativos, quien el 11 de mayo de 2018, procede a dar aprobación al acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes y, a remitir el mismo para su control judicial a los Juzgados Administrativos de Bogotá; acuerdo conciliatorio que tuvo como punto de partida el oficio N° OFI18-0014 MDNSGDALGCC del 3 de mayo de 2018 expedido por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, donde decide conciliar para el periodo comprendido entre 1997 y 2004 (fls. 95 al 96), remitiendo para este efecto la liquidación correspondiente de la que se extrae:

	INCREMENTO
1997	26.93
1998	17.84
1999	14.91
2000	9.23
2001	9.00
2002	6.00
2003	7.00
2004	6.49

Incrementos totalmente diferentes a los establecidos por el principio de oscilación a través de los decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2000, 2737 de 2001, 745 del 2002, 3552 del 2003, 4158 del 2004, para el grado, como pasa a verificarse:

	OCSIL
1997	26,93
1998	17,79
1999	14,96
2000	9,23
2001	9,00
2002	6,00
2003	7,00
2004	6,49

En consecuencia el Despacho observa diferencias entre los incrementos realizados por la entidad y, los ordenados en el principio de oscilación, pues mientras para el año 1998 los decretos mencionados habían ordenado un incremento conforme al principio de oscilación de 17.79%, la entidad para dicho año aplicó un 17.84%, y mientras para el año 1999 se había ordenado un incremento conforme al principio de oscilación de 14.96%, la entidad aplicó un 14.91% para dicho año, y si bien, también existen diferencias entre el incremento realizado y, el IPC, para los años 1999 y 2002, como se ve reflejado en la liquidación aportada (fls. 98 al 99 vto), no puede el Despacho desconocer que los porcentajes reportados por la entidad como reconocidos por concepto de principio de oscilación no corresponden a los establecidos en los Decretos decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2000, 2737 de 2001, 745 del 2002, 3552 del 2003, 4158 del 2004, para el grado y, entrar a verificar dichos incrementos, con los porcentajes ordenados por el IPC, podría constituir un detrimento al patrimonio público, que hace lesivo el acuerdo conciliatorio presentado.

De esta manera al no existir concordancia entre los porcentajes reconocidos y/o liquidados por la entidad (fls. 97 al 98) y, los establecidos conforme al principio de oscilación, no existe certeza para el Despacho, que con el presente acuerdo conciliatorio no se esté generando un detrimento al patrimonio público, pues si bien es cierto para algunos años el IPC fue mayor al principio de oscilación, en este asunto algunos porcentajes aplicados por la entidad son diferentes a los establecidos en los decretos anuales, aspecto que se itera podría generar un hecho lesivo para el patrimonio público, bajo las implicaciones que esto trae.

Siendo consecuente, con todas las consideraciones anteriormente expresadas, procede el Despacho a improbar la conciliación objeto de estudio.

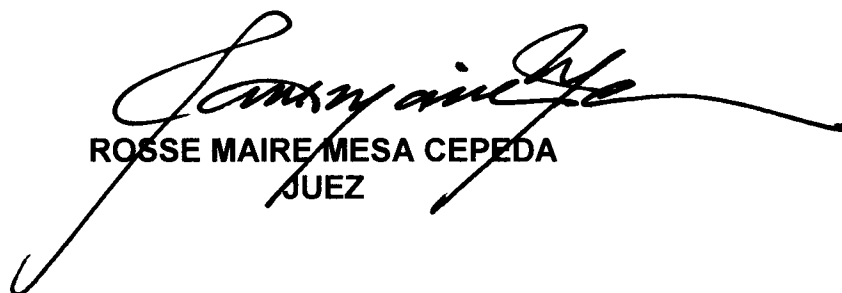
Por lo expuesto, el JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, SECCION SEGUNDA,

RESUELVE:

PRIMERO: IMPROBAR la conciliación prejudicial que se celebró en el Acta REG-IN-CE-002 con radicación No. 019-2018 SIAF 1432 del Veintidós (22) de enero de dos mil Dieciocho (2018); y audiencia realizada el Once (11) de mayo de dos mil Dieciocho (2018), ante la Procuraduría 86 Judicial I para Asuntos Administrativos entre el señor ALVARO PAYAN y LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA, conforme a lo manifestado a lo largo de esta providencia.

SEGUNDO: En firme ésta decisión, expídanse las copias a los interesados, déjense las constancias respectivas y archívese el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

6776

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA 05
Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior hoy <u>11 FEB. 2018</u> a las 8:00 a.m.
SECRETARIO 